

LA CONSTITUCIÓN HA MUERTO

- REFLEXIONES SOBRE EL TPP- (*)

Luis Hernández Navarro
18 de noviembre 2014

Señoras juezas, señores jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos

Compañeras y compañeros que a lo largo de casi cuatro años han documentado la barbarie que priva en nuestro país:

Hace 111 años, un 5 de febrero de 1903, los editores de *El Hijo del Ahuizote*, la revista satírica que desnudó la dictadura porfirista y abrió los surcos en los que germinó la Revolución mexicana, colocaron en el balcón de las oficinas del periódico el letrero "La Constitución ha muerto".

Tres días más tarde, la foto fue publicada en la edición del "semanario de oposición e intransigente con todo lo malo", junto a un artículo de Ricardo Flores Magón, apenas salido de la cárcel. Allí, el revolucionario oaxaqueño escribió:

"Doloroso nos es causar al pueblo mexicano la merecida afrenta de lanzar esta frase a la publicidad: "La Constitución ha muerto..."

¿Pero por qué ocultar más la negra realidad?

¿Para qué ahogar en nuestra garganta, como cobardes cortesanos, el grito de nuestra franca opinión?

Cuando ha llegado un 5 de febrero más y encuentra entronizada la maldad y prostituido al ciudadano; cuando la justicia ha sido arrojada de su templo por infames mercaderes y sobre la tumba de la Constitución se alza con cinismo una teocracia inaudita ¿Para qué recibir esta fecha, digna de mejor pueblo, con hipócritas muestras de alegría?

La Constitución ha muerto, y al enlutar hoy el frontis de nuestras oficinas con esta fatídica, protestamos solemnemente contra los asesinos de ella, como escenario sangriento al pueblo que han vejado, celebren este día con muestras de regocijo y satisfacción".

Hoy, en esta Audiencia Final del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, a 111 años de distancia de aquellos hechos, muy bien podríamos colocar en este magno auditorio un letrero similar al que los primeros magonistas pusieron en sus oficinas del edificio de la Calzada de las Cocheras número 3, hoy República de Colombia, y repetir una a una las frases del artículo *La Constitución ha muerto* sin que ninguna pierda pertinencia alguna. Si acaso, para estar en justa sintonía con los tiempos que corren, en la que se habla de cómo la justicia ha sido arrojada del templo

por los infaustos mercaderes, habría que añadir que estos mercaderes son hoy los nuevos Amos del Universo encumbrados por el Tratado de Libre Comercio.

Sí, la Constitución ha muerto como hemos visto en el memorial de agravios descrito a lo largo de estos dos días de trabajos forzados. Sí, nuestra Carta Magna falleció como lo atestigua la violación diaria de los derechos fundamentales del pueblo mexicano. Sí, nuestra Ley Suprema es hoy difunta, por la desviación permanente del poder, agravada a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio y el conjunto de políticas de ajuste y estabilización contenidas en el llamado Consenso de Washington.

Vivimos días de dolor y de esperanza, de miedo y de rabia. Días que hermanan el pasado 26 de septiembre con el 2 de octubre de 1968. La masacre de Iguala, un crimen de Estado y un delito de lesa humanidad, conmocionó al país y sacudió nuestras conciencias.

La matanza de seis personas -tres de ellas estudiantes normalistas de Ayotzinapa- y la detención-desaparición forzada de otros 43- le han dado trágicamente la razón a este capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos. Los más de 500 casos de graves violaciones a los derechos de los pueblos documentadas en 40 preaudiencias y 12 audiencias anticiparon lo sucedido este 26 de septiembre. Lo que se documentó trabajosamente a lo largo de tres años se condensó en 24 horas de barbarie.

Hoy, el maquillaje con el que el Estado mexicano cubre su rostro represor se ha desvanecido, para desgracia de los espíritus reptantes que quisieron presentar la monstruosidad del moderno Príncipe como situación transitoria en camino de desaparecer. Hoy, lo que el inolvidable José Revueltas, - nuestro José Revueltas, no el de ellos, del que celebramos sus 100 años de nacimiento-, llamó “la democracia bárbara en México”, es decir, la “democracia ideal”, mostró ser lo que él siempre afirmó que era: una democracia puramente invocativa, “como el traje de etiqueta con el que se viste al chimpancé para su grotesca actuación en el circo de la política mexicana”.

¡No! No olvidamos. Los de Ayotzinapa eran jóvenes, en su mayoría hijos de familias campesinas, estudiantes de una Normal Rural. Por eso los desaparecieron de manera forzada y asesinaron. Defendían la educación pública, el normalismo rural, la enseñanza al servicio de los más necesitados, la transformación social del país. Por eso los ejecutaron y secuestraron.

¡No! No olvidamos a los 45 ultimados de Acteal por grupos paramilitares, aunque sus homicidas materiales hayan sido liberados (los últimos apenas ayer) y los intelectuales jamás hayan puesto en pie en una cárcel.

¡No! No olvidamos a los 152 maestros democráticos asesinados o desaparecidos entre 1979 y 1992

como parte de la guerra sucia contra el magisterio.

¡No! No olvidamos a los 17 campesinos muertos en la matanza de Aguas Blancas a manos de policías, ni a los 11 asesinados en El Charco por soldados, ni a los 72 inmigrantes indocumentados ultimados por narcotraficantes, ni a las más de 700 mujeres asesinadas en Chihuahua, y a tantos otras y otros más.

Sí, también a ellos como a los alumnos de Ayotzinapa los mataron y desaparecieron por ser pobres, por ser campesinos, por ser mujeres, por ser indocumentados, por ser jóvenes, por ser maestros, por ser campesinos, por ser indígenas, por ser ambientalistas, por ser defensores de derechos humanos, por ser transgéneros, por ser periodistas, por ser creyentes, por atreverse a decirle ¡No! ¡No! y ¡No! al poder y al capital.

No olvidamos, ni tampoco perdonamos.

A los muchachos de Ayotzinapa como a todas las otras víctimas los secuestraron y asesinaron porque quienes lo hicieron podían hacerlo. No les costaba nada quitarles la vida. El clima de estigmatización en su contra, la impunidad generalizada y el Estado delincencial han hecho creer a los victimarios que nada les sucederá, que tienen licencia para matar.

Y en ese reino de la impunidad que es el México de hoy, hay homicidios pero no asesinatos, torturados pero no torturadores, robos pero no ladrones, mujeres violentadas pero no abusadores, policías y políticos violadores de derechos humanos pero no responsabilidad estatal.

En Chihuahua, nos recuerda Víctor Quintana, dirigente campesino y activo promotor de este Tribunal, una librería colocó en sus vitrinas un letrero que decía: “Si la letra con sangre entra, México estará leyendo mucho”: Bajo este criterio, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pasarán a la historia como los Presidentes de la lectura.

La búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos ha puesto al descubierto uno de los grandes horrores del México contemporáneo: amplias regiones del país son un enorme camposanto clandestino. Multitud de muertos sin nombre esperan el momento de ser desenterrados. Fosas clandestinas, piras fúnebres, personajes como el *Pozolero* -el macabro encargado de hacer desaparecer los restos de las víctimas- nos recuerdan que no hay forma de levantar paz alguna sobre la muerte. Justicia (o revancha) se vuelven irremediablemente un clamor de los deudos.

Ese clima delincencial que se vive en el país, tiene como uno de sus hilos conductores centrales de esta tragedia la existencia de un narcoestado. El escritor italiano Roberto Saviano, reconocido por sus libros sobre el negocio de las drogas, asegura que en este momento México es el centro del mundo.

Es el país que está experimentando con más violencia las contradicciones del capitalismo. México cuenta con las organizaciones criminales más poderosas y sanguinarias del planeta. Aquí se hacen negocios con la cocaína por valor de muchos miles de millones. El dinero se lava luego en los mejores bancos de los Estados Unidos, como han demostrado las investigaciones realizadas por las propias autoridades americanas. México es como un Estado más de los Estados Unidos, pero sin sus leyes ni sus reglas. El crimen organizado disfruta aquí de todas las ventajas de los Estados Unidos, pero sin sus inconvenientes.

Todas las muertes y desapariciones, abusos y devastaciones, desviaciones de poder y negocios ilícitos, parecieron convertir a México en un país de nota roja. No es asunto de percepción. Es una cuestión de hechos. La violencia se ha extendido hasta niveles inusitados y atraviesa todos los sectores sociales. Hampa, política y mundo empresarial se han entremezclado de manera espectacular.

No es que los medios de comunicación exageren para pelear por la audiencia o para vender más ejemplares. Las primeras planas de los periódicos reproducen, lisa y llanamente, lo que acontece en las plazas públicas y en los sótanos del país. No inventan, reflejan. La prensa no es hoy más amarillista o escandalosa de lo que era hace unos años. Es la realidad la que se ha modificado y ha hecho de las acciones criminales un asunto cotidiano. Los medios no pueden ignorar este hecho. La prensa construye una realidad a la medida de su público, no la inventa.

Las balaceras interminables, la captura del Chapo, grupos de autodefensa en acción, por citar algunos eslabones de la cadena, son realidades, no invenciones mediáticas. Como lo son, con toda su elocuencia dramática, los cadáveres colgados en un puente en Cuernavaca; las cabezas cercenadas que regularmente aparecen en Guerrero y otros lugares del país; las *narcomantas*; la *ejecución* de cantantes famosos a los que se relaciona con *cárteles* de la droga; el asesinato de 16 muchachos en una fiesta en Ciudad Juárez, o la muerte de estudiantes del *Tec* de Monterrey.

Escribió Jorge Ibargüengoitia (*En primera persona: nota roja*): “Leo notas rojas con frecuencia sin ser sanguinario ni sentirme morboso. Creo que todas las noticias que se publican son las que presentan más directamente un panorama moral de nuestro tiempo y ciertos aspectos del ser humano que para el hombre común y corriente son en general desconocidos; además siento que me tocan de cerca”.

Al contar lo que sucede en México como un país de nota roja, los medios están describiendo, con toda crudeza, el panorama moral de nuestro tiempo y nuestro país. La historia de la administración de

Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto se contaran desde la nota roja de los periódicos y no en los artículos y discursos de sus publicistas oficiales, a pesar de que, hasta ahora, este último haya tratado de ocultar la realidad de la violencia maquillando cifras sobre delitos. El sexenio del primero pasó a la historia como el del Ejército en las calles, los miles de asesinados, las violaciones a los derechos humanos y la inseguridad pública. El del segundo (dure lo que dure), será recordado como el de la entrega del petróleo a los inversionistas extranjeros, el hundimiento de la economía, la expansión de autodefensas y policías comunitarios y la masacre de Ayotzinapa.

En su libro *Terribilísimas historias de crímenes y horrores en la ciudad de México en el siglo XIX*, Agustín Sánchez cuenta cómo la nota roja del siglo XIX nos habla de la nación de la derrota, de la venganza, de la frustración, reflejadas en el robo, el asesinato, el suicidio. De la misma manera, en sus informaciones diarias, la prensa de hoy nos cuenta el drama de la descomposición política y económica de sus elites. Es sus páginas están narrados el dolor y el drama de los ciudadanos de a pie, la intriga y el odio de las cúpulas del poder, el grado de corrupción cívica.

De cuando en cuando, desde el poder se ensayan maniobras para contener daños. Cuando a comienzos del sexenio de Calderón comenzaron a agolparse los cadáveres y el papel de las rotativas se llenó de sangre, operadores gubernamentales trataron de convencer a los directivos de los medios de la inconveniencia de publicar que los muertos habían sido *ejecutados*. La iniciativa hizo agua a los pocos días. Años después, Peña Nieto apostó por cambiar la narrativa. Sus consejeros quisieron sacar el tema de los medios de comunicación. Las autodefensas primero y la masacre de Iguala después lo metieron por la ventana.

El presidente Felipe Calderón intentó presentar el problema de la gravedad de la violencia como un asunto de percepción y no de hechos. Según su gobierno y sus intelectuales, los medios divulgaban la existencia de los corceles del Apocalipsis trotando por el país, pero las catástrofes no existían realmente, no, al menos, en la magnitud en la que se reportaban. Y, con todos los recursos a su alcance, procuraron construir consensos para que los medios moderaran su cobertura.

Enrique Peña Nieto apostó por el apagón informativo alrededor del clima de inseguridad pública. Pero su estrategia naufragó. La imagen de las fosas clandestinas y los edificios públicos en llamas la han derrumbado.

México se ha convertido en el país de una nota roja que es retrato fiel de la decadencia de sus elites económicas y políticas. Pero la cosa no ha quedado allí. Este Tribunal Permanente de los Pueblos primero y la enorme indignación social provocada por la masacre de Iguala después han

mostrado que detrás de esa nota roja hay mucho más fondo. La cloaca se ha destapado. El pacto de impunidad ha quedado al descubierto. La crisis de la política y de lo político se han hecho visibles.

Hay una parte de México que no cabe en sus instituciones. Son más de 60 millones de ciudadanos que viven en la pobreza sin más horizonte que el de seguir subsistiendo en esa condición. Son los sobrantes del Tratado de Libre Comercio y las reformas estructurales.

Se trata de una franja de la nación real cuya realidad no es registrada en las versiones oficiales sobre nuestra realidad. Una porción del país de la que la mayoría de los políticos se acuerda sólo cuando hay elecciones cada tres años. Un trozo de la patria a la que los tecnoburócratas quisieran eliminar para que sus cifras macroeconómicas cuadren como su catecismo manda.

Y esa enorme porción del país expulsada de los beneficios del desarrollo y de la representación política genuina llegó ya está llegando a una situación límite. Esta nación no será gobernable si se mantiene tanta segregación de tantos. Construir un México donde quepamos todos requiere de una gran reforma que propicie la inclusión de quienes han sido excluidos.

La radiografía del desastre que vivimos está aquí, documentada en las 500 acusaciones que se han presentado y en las conclusiones preliminares a las que se ha arribado. El mapa del fracaso está aquí, dibujado por los cientos de miles de jóvenes que, indignados por la desaparición de sus hermanos normalistas, gritan ¡Ya Basta! a lo largo y lo ancho del territorio nacional.

En la hora de la tragedia de Ayotzinapa, el tiempo se le agota al presidente Enrique Peña Nieto. Escondido, la autoridad se le escabulle como agua a través de los dedos de las manos. Carente de estrategia para enfrentar la tragedia, limitado a maniobrar para evitar que la justicia internacional caiga sobre el Estado, busca detener las manecillas del reloj a la espera de un milagro, y ve cómo la indignación popular está cada vez más cerca de Los Pinos.

Son épocas de sufrimiento, pero, también, como lo demuestra el enorme despertar de la juventud mexicana y como lo evidencia este Tribunal, de hombres y mujeres que (como señala Alain Badiou) saben que se puede estar de pie a pesar de ese sufrimiento, que reivindican el derecho a rebelarse contra el mundo tal cual nos quieren hacer creer que es. Son épocas en las que se están inventando posibilidades nuevas, en las que se esclarece que en el fondo nada es verdaderamente imposible.

Hoy, como hace 111 años, es cierto que *La Constitución ha muerto*. Pero también lo es que vivimos un tiempo nuevo, uno de refundaciones. Este Tribunal Permanente de los Pueblos es, simultáneamente, testigo y partero de este tiempo. Ellos, allá arriba, tienen el reloj; nosotros, aquí abajo, tenemos el tiempo.

(*) Intervención de Luis Hernández Navarro en la Audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México. Nov 18, 2014